

NOMENCLATURA: 1. [40] Sentencia.

JUZGADO: 22° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL: C-28794-2019

**CARATULADO: MORALES/FISCO DE CHILE - CONSEJO
DEFENSA DEL ESTADO**

Santiago, once de junio de dos mil veinte.

VISTO:

A folio 1, comparece Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, en representación convencional de **JOSÉ ENRIQUE MORALES LIZANA**, pensionado, ambos domiciliados para estos efectos en calle Carmen N° 602 departamento 2611, comuna de Santiago, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios, en Juicio de Hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por su presidenta María Eugenia Manaud Tapia, con domicilio en Agustinas N° 1687, Santiago.

Funda su pretensión en que con fecha 8 de diciembre de 1983 a las 7.00 horas, mientras se preparaba para dirigirse al trabajo, fue detenido en su domicilio por varios agentes de la Tercera Comisaria Judicial de Investigaciones de Chile. Indica que, allanaron su domicilio, amenazaron a su familia, lo golpearon inmediatamente, le vendaron la vista, lo esposaron, le pusieron una pistola en la cabeza y lo sacaron a la calle, lo suben a un vehículo y lo llevan a una comisaria, en el trayecto es amenazado de muerte muchas veces y se le interroga, se me pregunta por armas, por nombres de dirigentes políticos, es golpeado constantemente. Al llegar a la comisaria, asegura haber sido golpeado e insultado, lugar en el que estuvo por cuatro días, en los cuales fue torturado, siempre vendado y esposado, recibiendo diversos tipos de vejámenes,

Expresa que el cuarto día fui puesto a disposición de la Dirección General de Investigaciones donde tuvo lugar un montaje, el Director General hizo una declaración de prensa presentándome junto a otras cuatro personas, acompañando un grupo de armas y explosivos más documentación, y afirmando falsamente que pertenecían a los detenidos. Agrega que, fue expuesto con otras personas a la prensa, radio y televisión, acusándonos falsamente de terroristas y sin posibilidad alguna que



hiciéramos alguna declaración. Posteriormente fueron puestos a disposición de la 2ª Fiscalía Militar donde fui tratado con brutalidad, ordenando el Fiscal Militar, su incomunicación durante ocho días en la Cárcel Pública y finalmente fui declarado reo en libre plática en la misma cárcel. Hasta este instante no se le permitió consultar abogado, ni poder ver o comunicarse con su familia. Agrega que, la Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de amparo en su favor, siendo reconocido como víctima de Prisión Política y Tortura por la Comisión Valech. Añade fragmentos del informe de la comisión Valech.

Refiere que la vida de su representado fue violentamente interrumpida, caracterizada por hechos tremendamente inhumanos, abusivos y violentos, que lo transformaron en una víctima de los agentes del Estado respecto a los denominados delitos de lesa humanidad.

Respecto a los fundamentos jurídicos de su pretensión, alude a que la responsabilidad del Estado emana de los perjuicios que provocan y causan los órganos de la administración, lo que está reconocido en la Constitución Política del Estado de 1980, y en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego de citar cierta jurisprudencia y doctrina sobre el estatuto de responsabilidad que se invoca, se detiene en sostener la imprescriptibilidad de la acción de reparación que deduce en autos, ya que intentar aplicar el derecho común a este tipo de casos resultaría un incumplimiento grave por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y a su condición de Estado perteneciente a la comunidad internacional, así como a los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, amparados por los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia que obligan a la Nación a reconocer y proteger este derecho a la reparación integral, con arreglo a lo ordenado en los artículos 5º, inciso segundo, y 6º de la Carta Política. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos estatuyen que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros aspectos de derecho interno, pues si se comete un hecho punible imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la



inobservancia de un canon internacional, con el subsecuente deber de reparación y de hacer cesar los colofones del agravio. Cita profusa jurisprudencia en apoyo a su tesis.

En cuanto al daño experimentado, sostiene que la mayoría de nuestra jurisprudencia considera que el daño moral consiste, equivale, y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba. Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño. Con respecto al deber de responder por los daños irrogados por vulneración de los derechos fundamentales, en el ámbito internacional la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 dispone que: Cuando hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta Convención dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Puntualiza en que el demandante fue víctima de detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos crueles, inhumanos y deliberados, lo que generó un gran daño en su vida emocional, personal y laboral, las vejaciones de las que fue víctima han hecho que hasta el día de hoy no pueda llevar una vida normal a pesar de los esfuerzos que ha realizado por ello, toda vez que sigue siendo atormentado por lo vivido, motivo por el cual estima que sea reparado con una indemnización que alcance a los \$300.000.000.- (trescientos millones de pesos), más intereses, reajustes legales y costas; o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero, que el Tribunal estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

A folio 6, consta notificación personal del demandado.



A folio 7, la demandada contesta el libelo enderezado en su contra, pidiendo su rechazo. Previa síntesis de los hechos de la demanda, opone las excepciones de reparación satisfactiva y en subsidio de esta, la prescripción.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva, alega la improcedencia de la pretensión del actor, porque ya habría sido indemnizado. Principia efectuando una relación del marco general de las reparaciones ya otorgadas, dentro de la denominada “Justicia transicional”, indicando que dentro de un concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas incluirían beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, según quedó plasmado en la Ley N°19.123 y otras normas jurídicas conexas, las cuales describe *in extenso*. Añade que existe identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas, puntualizado que puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables, por lo que las pretensiones acá indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

Subsidiariamente, como fuere dicho con antelación, deduce excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo preceptuado por el artículo 2332 del Código Civil, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo normativo. Funda su defensa en que conforme el relato de la parte demandante, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, ocurrió el 8 de diciembre de 1983, por lo que, suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 5 de noviembre de 2019, igualmente ha



transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil. Así las cosas, concluye que el plazo de 4 años establecido por la norma citada ha transcurrido con creces. Sin perjuicio de ello, y para el evento en que el Tribunal estimare que dicha norma no es aplicable en el caso de autos, viene en oponer la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, fundada en que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles ejercidas en este pleito, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil. Refrenda su defensa con jurisprudencia y normas de derecho internacional, señalando particularmente que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, procede el rechazo de la demanda por la prescripción de la acción civil.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, viene en formular las alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y al monto pretendido, expuestas a continuación.

Sostiene que tratándose del daño puramente moral, la finalidad de restablecimiento del equilibrio destruido por el hecho ilícito no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél, por cuanto el daño moral no se borra por obra de la indemnización, y en tanto la pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba, razón por la cual la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.



De tal forma, y en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción opuestas, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado, conforme a las leyes de reparaciones N°19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente, y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Además respecto de los intereses y reajustes, postula su improcedencia, toda vez que si bien la actora solicita su pago desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo de las sumas indemnizatorias, a la fecha de interposición de la demanda de autos, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, no existe obligación alguna de indemnizar de parte de su representada, no existiendo de esta forma suma alguna que reajustar. Del mismo modo, esgrime respecto de los intereses que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado en el cumplimiento de una sentencia. Por lo anterior, concluye que en el hipotético caso en que se acogieren las acciones de autos y se condenare a su representado al pago de una suma indemnizatoria, sus reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

A folio 11, la demandante evacúa el trámite de la réplica. En su escrito solicita se acoja su demanda, desestimándose por su parte los argumentos de la contraria. Argumenta que la normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

Seguidamente, sostiene que la acción que se ejercita contra el Fisco busca obtener la reparación de los perjuicios que fueron ocasionados por agentes del Estado chileno, como se desprende de los tratados



internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, lo que resulta totalmente coherente y procedente conforme se desprende de La Constitución Política de la República de Chile, en concordancia con los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Artículo 5° y 6°, de La Constitución Política de la República de Chile, lo que obliga al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación integra. Prosigue indicando que a lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en convenios y tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de Enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado. Finaliza su réplica con una exposición extensa de jurisprudencia en apoyo a su postura.

A folio 13, la demandada evacúa la dúplica, reiterando las alegaciones, excepciones y defensas opuestas en su escrito de contestación, solicitando el rechazo de la demanda.

A folio 16, se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

A folio 31, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, **JOSÉ ENRIQUE MORALES LIZANA** interpuso demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, todos ya individualizados, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la primera parte de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, la demandada, contestando la acción dirigida en su contra, solicita su total rechazo, con costas, por los fundamentos expresados precedentemente.

TERCERO: Que, en apoyo a su pretensión, la demandante produjo la siguiente prueba.

Bajo el N° folio 19:



1.- Extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, específicamente el Capítulo II Título II, en el que se describen detalladamente las secuelas en el plano de la salud mental, producto de las violaciones a los Derechos Humanos;

2- Presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador del Equipo PRAIS, en el cual señala las Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los Derechos Humanos;

3- Presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador Especializado del Equipo PRAIS, en el cual señala la Transgeneracionalidad del daño generado a víctimas de violación a los Derechos Humanos;

4- Conferencia Internacional denominada Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena, del Ministerio de Salud de Chile;

5- Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura militar, elaborado por PRAIS y suscrito por Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS.

6- Artículo denominado Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS de la Araucanía Norte, Sergio Beltran P.;

7- Informe denominado, Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico, realizado por la Vicaria de la Solidaridad;

8- Informe denominado Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, realizado por la Vicaria de la Solidaridad. (Programa de salud);

9- Informe, sobre la tortura, tratos crueles e inhumanos y su impacto psicológico, las prácticas de amedrentamiento a la población, relegaciones y su impacto psicológico en las personas y en la familia, entre otros;

10- Certificado de atención psicológica, realizado por Carolina Canales Cortés;



11- Informe denominado: Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, realizado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad;

12- Informe denominado: Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos, realizado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, integrado por los Doctores. Andrés Donoso, Guillermo Hernández, Ramiro Olivares, el Psicólogo Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería Janet Ulloa.

13- Informe realizado por el equipo de profesionales de la salud de La Vicaria de la Solidaridad, denominado: Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas;

14- Estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia, realizado por el Neuropsiquiatra Jacobo Riffo y la Psicóloga Viviane Freraut del equipo de salud mental del DITT (Detención, Investigación y Tratamiento de la Tortura) y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo);

15- Estudio Significado psicosocial de la tortura, ética y reparación, realizado por Elisa Neumann, psicóloga y por Rodrigo Erazo, psiquiatra, del equipo médico psiquiátrico de FASIC;

16- Monografía denominada Lo Igual y lo Distinto en los Problemas Psicopatológicos Ligados a la Represión Política, realizada por el Psiquiatra Mario Vidal del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS);

17-Estudio denominado Trauma Político y Memoria Social realizado por E. Lira y M. Castillo, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS);

18- Ponencia denominada Tortura y Trauma Psicosocial, realizada por el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga, miembro del Comité Directivo y director clínico de CINTRAS, integrante del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT);

19- Estudio denominado Consecuencias Psicosociales de la Represión Política, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira;



20- Monografía denominada Aspectos Psicosociales de la Represión Durante la Dictadura, realizado por María Teresa Almarza, Psicóloga del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS);

21- Monografía denominada Tortura y trauma: El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas, realizada por el Psiquiatra Carlos Madariaga, de CINTRAS;

22- Estudio denominado las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica, realizado por el doctor Hernán Reyes, de la división de asistencia de la Cruz Roja Internacional;

Bajo el folio N° 21

23.- Copia del Capítulo III, V y VIII del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Contexto.

24.- Informe Psicólogo de José Enrique Morales Lizana, emitida Carolina Canales Cortes, Psicóloga, con fecha 03 de enero de 2020;

25.- Extracto, de nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, en la que se encuentra José Enrique Morales Lizana.

CUARTO: Que, la demandada allegó el siguiente instrumento:

Bajo el folio N° 23:

1.- Certificado emitido por el Instituto de Previsión Social que informa sobre los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido José Enrique Morales Lizana;

QUINTO: Que, la controversia de autos versa sobre la detención y vejaciones de que habría sido objeto José Enrique Morales Lizana, por agentes del Estado, y la responsabilidad indemnizatoria que cabría por tales hechos, por lo que, en primer lugar, es necesario determinar la existencia de dicha responsabilidad. En este sentido, constituye un hecho público y notorio en nuestro país aquella información contenida en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el que da cuenta de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos practicadas por el Estado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. En tal documento, acompañado mediante certificado del INDH, a folio 21, en la Nómina de Personas Reconocidas Como Víctimas, en su página 385, reconoce al demandante como una de éstas, la cual será valorada de conformidad con



lo dispuesto en el artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, nos lleva a concluir de forma inconcusa que la parte demandante fue víctima de violación de derechos humanos, por lo que tendremos por concurrente el elemento del hecho dañoso.

Ahora bien, en cuanto a la imputación de responsabilidad estatal, a la luz de tal antecedente, ésta se configura claramente, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en las reparaciones simbólicas otorgadas por la Ley N° 19.123 a la demandante.

SEXTO: Que, asentada la responsabilidad del Estado en cuanto agente que causó violaciones a los derechos humanos de la parte demandante, corresponderá hacerse cargo de las defensas esgrimidas por la demandada, las cuales no tienen por mérito tergiversar o enervar tal responsabilidad, sino que dicen relación con la reparación de los vejámenes de que fue objeto el actor, o en cuanto a la oportunidad en que se solicita el resarcimiento.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la improcedencia de las indemnizaciones demandadas en razón de ya haber sido reparados, la demandada alegó que la demandante ya ha sido indemnizada en cuanto al daño sufrido, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y las constitutivas de beneficios de salud, a través



del programa PRAIS. A tal respecto, la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a favor de las Personas que señala, ha establecidos medios voluntarios a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. En efecto, el artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente. En consecuencia, los beneficios establecidos en los cuerpos legales que cita la demandada en caso alguno importan incompatibilidad con la reparación pecuniaria del daño moral, por lo que se rechazará la excepción como fuere planteada.

OCTAVO: Que, en cuanto a la excepción de prescripción extintiva, esta es fundada en haber transcurrido con creces el plazo de 4 años para el transcurso del plazo de prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual -o de 5 años, en subsidio-, contado desde la fecha en que ocurrieron los hechos ilícitos hasta la fecha de notificación de la demanda, suspendido incluso el cómputo durante el régimen militar. La demandada expresa que, sin perjuicio de las normas de derecho interno invocadas, además, no existe en el derecho internacional de los derechos humanos instrumentos internacionales que declaren la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad ni que impidan o prohíban la aplicación del derecho nacional.

Sobre el particular, debe tenerse en consideración lo dispuesto por artículo 5° de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los



órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Dicho precepto, permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional. En tal escenario, tenemos que la naturaleza de acción pretendida excede con creces el marco de la regulación interna sobre prescripción extintiva de las acciones civiles, el cual representa un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, por lo que será necesario recurrir a normas que emanan del derecho internacional de derechos humanos y del *ius cogens* o reglas imperativas de derecho internacional.

En consecuencia, la aplicación de las normas de responsabilidad civil extracontractual contenidas en nuestro derecho interno pugnarían con la obligación de resarcir íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad, que ciertamente incluye el ámbito patrimonial, obligación que se contiene en normas de derecho internacional de derechos humanos incorporadas a nuestra Constitución Política de la República por mandato de su artículo 5°. En atención a lo dicho, las reglas de derecho internacional deben tener una aplicación preferente, según mandato del citado artículo, por sobre las disposiciones de derecho interno que permitan eludir responsabilidades al Estado y no reparar íntegramente el daño causado a las víctimas. Esto se aviene con lo establecido en la Convención de Viena, sobre derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que en su artículo 27 dispone que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, y que de hacerlo, cometen un ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Se concluye así, que la fuente de la responsabilidad civil del Estado con ocasión de violaciones de los derechos humanos se encuentra en principios y normas de derecho internacional de derechos humanos.



Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados; dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, lo que importaría transgredir preceptos constitucionales.

En suma y, a juicio de este sentenciador, la acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible, por los antecedentes normativos citados, por lo que se rechazará la excepción de prescripción extintiva deducida.

NOVENO: Que, habiéndose desechado las excepciones opuestas y estableciéndose la responsabilidad civil estatal, y esbozándose la idea sobre la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 entre otras, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en el considerando previo, debe analizarse el fondo de la acción deducida, esto es, la procedencia de indemnizar al Señor Sanhueza Acevedo por el daño moral producido ocasión de los apremios ilegítimos y violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las alegaciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por los actores, opuestas por la demandada.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o



en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

En este sentido, mediante la instrumental de folio 21 será posible tener por establecido que la demandante sufrió efectos psíquicos del daño causado por la experiencia de violencia extrema del Estado de Chile en su contra, acarreando consecuencias psicológicas que producen efectos en él hasta la actualidad. A mayor abundamiento, en concepto de este Tribunal, el hecho de haberse provocado un daño moral como el invocado por la actora con ocasión de los apremios ilegítimos en la especie sufridos ésta, se perfila como una consecuencia probable y directa de la actuación de los agentes Estatales, atendidas sus circunstancias y características públicamente conocidas y acreditadas, estableciéndose por tal circunstancia el vínculo o nexo causal entre el daño y el agente causante de éste. Por todo lo expresado, es que se encuentra acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a la demandante, debido a los apremios ilegítimos y torturas cometidas sobre su persona por agentes del Estado, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

DÉCIMO: Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el demandantes, es necesario fijar su cuantía en dinero. Para esta materia, el tribunal considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de los ilícitos, a fin de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima.

Cabe hacer presente que este tribunal comprende cabalmente que la suma de dinero que se conceda a título de indemnización en nada destierra el dolor y aflicción sufrido por la demandante debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de éstos, encontrándose entre ellos quien acciona bajo estos autos. Así las cosas, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión a la actora, durante tan largo tiempo, corresponde ahora que le devuelva a su amparo y morigere en cierta



extensión los efectos perniciosos de su obrar, por lo que la acción deducida habrá de prosperar.

En consecuencia y según lo expuesto, y sin perjuicio de haberse acreditado el daño y demás elementos que configuran el estatuto de responsabilidad que ha invocado la demandante, tenemos que la prueba rendida resulta insuficiente para fijar la indemnización en la cuantía que fuere solicitada en su oportunidad, pero ello no obsta a que esta se fije prudencialmente, a la luz de los antecedentes que ya obran en autos y que fueren descritos y valorados con anterioridad, en la suma de \$40.000.000.-, los que deberá pagar el Estado a la demandante, por concepto de daño moral.

Al respecto, cabe tener presente numerosa jurisprudencia reciente de Tribunales superiores de Justicia que, sin ser vinculante para este tribunal, en circunstancias análogas, han fijado indemnizaciones de montos similares.

DÉCIMO PRIMERO: Que, las sumas referidas en el considerando precedente se pagarán reajustadas de acuerdo a la variación del I.P.C. desde la fecha en que quede firme la condena y el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto se acogerá la excepción deducida por la demandada. Junto a lo anterior, tales sumas deberán pagarse aumentadas con los intereses corrientes aplicados desde la fecha en que quede firme la condena y el pago efectivo de la indemnización, todo conforme liquidación que se practicará oportunamente en Secretaría de este Tribunal.

DÉCIMO SEGUNDO: Que en cuanto a las costas de las causa cada parte soportará las propias, en razón de no haber resultado totalmente vencida la demandada.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes y 38 de la Constitución Política de la República; 4 de la Ley N°19.653, de Bases Generales de la Administración del Estado; 27 y siguientes de la Convención de Viena; 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

I.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida por **JOSÉ**



ENRIQUE MORALES LIZANA en contra del **FISCO DE CHILE**, todos ya individualizados, y se condena a éste a pagar en su favor la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), debidamente reajustada conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, y aumentada con los intereses corrientes, calculados desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización, todo según liquidación que se practicará en su oportunidad.

II.- Que cada parte soportará sus costas.

Regístrese y notifíquese.

C-28794-2019

Pronunciada por **PEDRO ENRIQUE GARCÍA MUÑOZ**, Juez Titular.

